



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL FEDERAL DE JUICIO N° 2 DE ROSARIO

FSM 2549/2011/TO1

Rosario,

VISTOS: El caso **FSM 2549/2011/TO1** de entrada por ante este Tribunal Federal de Juicio N°2 de Rosario, caratulado “**Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: S [REDACTED], SEBASTIAN Y OTROS S/ENCUBRIMIENTO (ART.278) QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTRO**”.

RESULTA:

1. La defensa del imputado Wilfredo S [REDACTED], el Dr. Oscar Eduardo R [REDACTED], interpuso excepción por falta de acción, en los términos del artículo 339 inciso 2) y 358 CPPN, con el objeto de apartar a la Unidad de Información Financiera (en adelante UIF) como parte querellante en el presente caso.

Invocó como fundamento medular de su pretensión la sanción y entrada en vigencia del Decreto N° 274/2025, (publicado en el Boletín Oficial el 16 de abril del corriente año), mediante el cual se derogó el artículo 10 del Decreto 2226/2008 que facultaba a la UIF a intervenir como parte querellante en los procesos donde se investigan delitos tipificados por la Ley 25.246. Hizo hincapié en que la normativa citada fue dictada en sintonía con los lineamientos fijados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Sostuvo que la modificación introducida por el decreto mencionado implica un cambio de paradigma en las funciones y atribuciones de la UIF, al limitar sus competencias a tareas de análisis, tratamiento y transmisión de información para la prevención de delitos vinculados al lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, en coordinación con los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Público Fiscal, pero sin la facultad de intervenir como parte querellante.

Con base en ello, la defensa argumentó que el Decreto N° 274/2025 debía aplicarse no sólo a futuro, sino también



retroactivamente a todos los procesos en curso, incluso aquellos en los que la UIF ya se encontraba constituida como querella. Alegó que, en virtud de este nuevo marco normativo, la UIF carecería actualmente de legitimación para continuar interviniendo en calidad de parte acusadora, solicitando en consecuencia su apartamiento.

Asimismo, señaló que la continuidad de la UIF en el rol de querellante en el presente caso violaría el principio de igualdad en orden a que los imputados se enfrentarían con dos órganos acusadores.

Finalmente, agregó que una decisión en contrario resultaría incorrecta y violatoria de los principios de legalidad e interpretación restrictiva de las normas.

Citó jurisprudencia de la CSJN para fundar su postura.

2. Otorgada intervención a la Unidad de Información Financiera solicitó el rechazo del planteo formulado por la defensa del imputado S [REDACTED].

En esta dirección, la UIF sostuvo que dicho decreto, si bien derogó el Decreto N° 2226/08 -que autorizaba expresamente su actuación como querellante-, no estableció disposición alguna respecto de las causas en las cuales ya se encontraba constituida en tal carácter, como tampoco ordenó su apartamiento retroactivo en los procesos en curso. En tal sentido, argumentó que el nuevo régimen resulta aplicable únicamente a futuro, sin afectar legitimaciones previamente autorizadas.

Enfatizó que "[l]a derogación del Decreto N° 2226/2008 implica una cuestión de política criminal para que la UIF deje de constituirse como querellante, más no revocación alguna para continuar en su rol en aquellas causas en las que durante su vigencia ya se encontraba constituida como tal".

Asimismo, alegó que una interpretación extensiva del Decreto N° 274/25, tal como sostiene la defensa, resultaría contraria al principio de legalidad y atentaría contra la seguridad jurídica, al





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL FEDERAL DE JUICIO N° 2 DE ROSARIO

FSM 2549/2011/TO1

pretender remover a un organismo de su rol querellante sin una expresa disposición normativa en tal sentido.

Fundó su legitimación en las facultades otorgadas por la Ley N° 25.246 y por el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación, en tanto consideró que estamos ante un organismo particularmente ofendido por delitos que afectan el orden económico y financiero. Agregó que su actuación no implica superposición funcional con el Ministerio Público Fiscal, conforme jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal y recomendaciones del GAFI.

Adujo también que "[u]na interpretación como la efectuada por la defensa no solo constituye un acto de extrema arbitrariedad, sino que causaría un gravamen irreparable al quitarle a esta Unidad derechos adquiridos, oportunamente otorgados por el Poder Legislativo (Ley), el Poder Ejecutivo (oportuna autorización) y el Poder Judicial (auto de constitución de parte Querellante)".

Por último, advirtió que su apartamiento en este estadio procesal, comprometería el curso de investigaciones complejas y afectaría el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino en la materia.

3. Corrida vista al Ministerio Público Fiscal propuso rechazar la excepción planteada por la defensa en orden a que "la ratio legis que sustenta dicho decreto está dada por una cuestión de optimización de los recursos existentes que forman parte de las potestades del poder administrado".

Agregó que "de haber sido la voluntad del Poder Ejecutivo apartar a la UIF de las causas en las cuales ya se encuentra constituida como querellante, así lo hubiese regulado, toda vez que el Decreto no la revoca en su rol, ni tampoco regula un proceso de cese en su participación con respecto a las obligaciones ya asumidas. En otras palabras, no se revocó la representación oportunamente otorgada".



4. A su turno, los Dres. Mariana B[REDACTED] y Gerardo Andrés B[REDACTED], en representación de Roberto Martín G[REDACTED], coincidieron con el planteo formulado por la defensa de S[REDACTED].

Fundamentaron su presentación, en el reciente Decreto 274/2025, el cual deroga el Decreto 2226/08 y modifica el marco normativo de actuación de la UIF, limitando su rol a la colaboración con el Ministerio Público Fiscal (MPF), en línea con las recomendaciones del GAFI, a fin de preservar su independencia funcional y evitar la superposición con el MPF, órgano constitucionalmente encargado de ejercer la acción penal pública (art. 120 CN).

Argumentaron que mantener a la UIF como parte querellante resulta incompatible con la nueva normativa y vulnera principios constitucionales tales como la legalidad, el debido proceso y la retroactividad de la ley penal más benigna, ya que el nuevo decreto favorece claramente la posición del imputado.

Asimismo, destacaron que el apartamiento de la UIF no implica perjuicio para el Estado, toda vez que el MPF ya ha requerido la elevación a juicio y la UIF puede continuar colaborando conforme a su nueva función legal.

Por otra parte, hicieron hincapié en que en el presente caso se investiga el delito de lavado de activos en carácter de tentativa, lo que a su criterio, dificultaría a la UIF en orden a mantener la acusación en oportunidad de celebrarse la audiencia de debate.

Sostuvieron, asimismo, que el Decreto 274/2025 debe ser interpretado conforme al principio Pro Homine, en los términos en que ha sido delineado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su jurisprudencia.

Finalmente, formularon expresa reserva de recurrir en casación y de plantear caso federal en caso de rechazo de lo solicitado.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL FEDERAL DE JUICIO N° 2 DE ROSARIO

FSM 2549/2011/TO1

CONSIDERACIONES:

1. Que, a los fines de resolver la incidencia planteada por la defensa de Wilfredo S[REDACTED], el Dr. Oscar Eduardo R[REDACTED], cabe referir que el artículo 10 del Decreto del PEN N° 274/2025 derogó el Decreto 2226/08 que autorizaba a la UIF a intervenir como parte querellante en los procesos en que se investigaran los delitos tipificados en la ley que dio origen a ese organismo estatal.

En primer lugar, corresponde indicar que la UIF fue creada por la Ley N° 25.246 y funciona con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Justicia de la Nación.

Entre sus funciones más relevantes se encuentran el análisis, tratamiento y transmisión de información con el fin de prevenir e impedir delitos vinculados al lavado de activos, así como al financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, conforme lo establece su ley de creación.

En lo que aquí interesa, corresponde señalar que la Unidad de Información Financiera (UIF) contaba con diversas atribuciones legales, entre las cuales se incluía la posibilidad de requerir la colaboración del Ministerio Público Fiscal para acceder a información relevante, así como formular solicitudes ante la autoridad judicial competente respecto de medidas tales como allanamientos, requisas y secuestros. En este marco, el artículo 19 de la Ley N° 25.246 establecía que: “[c]uando la Unidad de Información Financiera (UIF) haya agotado su análisis, en el marco de su competencia, y surgieren elementos de convicción suficientes para establecer la existencia de un hecho, operación u operatoria sospechosa de lavado de activos, de financiación del terrorismo o de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, ello será comunicado al Ministerio Público Fiscal a fin de establecer si corresponde ejercer la acción penal.” Asimismo, la norma preveía que “cuando el análisis se encuentre vinculado con hechos bajo investigación en una causa



penal, la Unidad de Información Financiera (UIF) podrá comunicar su sospecha directamente al juez interviniente."

En igual sentido, cabe recordar que con fecha 23 de diciembre de 2008 se dictó el Decreto N° 2226/08, mediante el cual se facultó expresamente a la Unidad de Información Financiera a intervenir como parte querellante en los procesos judiciales en los que se investigara la comisión de los delitos previstos en la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. Ello con fundamento en la necesidad de asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En ese contexto, se sostuvo que *"el Estado Nacional tiene un significativo interés institucional en satisfacer los deberes emergentes de los compromisos internacionales asumidos en la materia, tales como la 'Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas' –Viena, 19 de diciembre de 1988–, aprobada por nuestro país mediante la Ley N.º 24.072, el 'Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo' –Nueva York, 9 de diciembre de 1999– aprobado mediante la Ley N.º 26.024, y la 'Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional', aprobada mediante Ley N.º 25.632, entre otros; por lo que se requiere que, con el máximo respeto a la división constitucional de poderes, el Poder Ejecutivo Nacional tome intervención en las actuaciones judiciales en las que se investigan hechos de tal gravedad."* Bajo este plexo normativo se constituyó como querellante la UIF en este caso en particular.

No obstante lo expuesto, y bajo la premisa de que *"las modificaciones que se propician por la presente medida permitirán dar acabado cumplimiento a las recomendaciones del GAFI y mejorar notablemente la capacidad de las instituciones del Estado Nacional para hacer frente al crimen organizado, en defensa de la seguridad de los ciudadanos y los intereses vitales de nuestro país"*, el 16 de abril del corriente año se publicó el Decreto N.º 274/2025. A través de esta norma, se dispuso una reestructuración





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL FEDERAL DE JUICIO N° 2 DE ROSARIO

FSM 2549/2011/TO1

integral de la UIF, lo cual implicó la modificación de los marcos normativos que regían su funcionamiento, establecidos en la Ley N° 25.246, la Ley N° 25.520 y el Decreto N° 577/2017. En lo que aquí resulta pertinente, dicho decreto dispuso expresamente la derogación del art. 10 del Decreto N° 2226/2008.

2. Ahora bien, adelanto que el planteo de la defensa no tendrá acogida favorable por las razones que expondré a continuación:

En esta dirección, corresponde mencionar que el dictado del decreto en cuestión responde a una decisión de política criminal adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional, orientada a otorgar a la UIF un rol más preponderante, en el ámbito de la prevención del delito, al concentrar su actuación en tareas de control, análisis y producción técnica de información, suprimiendo su intervención como parte querellante en procesos penales en los que la función acusatoria es ejercida por el Ministerio Público Fiscal.

Que, en cuanto a la disposición contenida en el artículo 10 del Decreto N° 274/2025, resulta plenamente operativa solo para los casos futuros, tal como fue precisado por el representante de dicho organismo en su presentación. En este rumbo, el referido decreto, en orden a su implementación y aplicación, no establece distinción alguna entre casos en trámite y casos futuros.

Consecuencia de ello, es que la decisión adoptada no importa una aplicación retroactiva de las disposiciones en cuestión, sino el reconocimiento de que, en el estado actual del ordenamiento, aquel "interés institucional" invocado oportunamente en el Decreto N° 2226/2008 ha sido redireccionado hacia nuevas finalidades, sin que ello altere la validez o eficacia de las actuaciones realizadas hasta el momento, ni que implique apartar a las querellas constituidas hasta el dictado del decreto 274/2025.



En tal sentido, cabe señalar -en contraposición con lo señalado por la la defensa y conforme lo consignado por la UIF- que esta interpretación en modo alguno vulneraría el principio de igualdad, o se verían sometidos, los imputados, a un tratamiento diferenciado, por contar con un acusador adicional, a diferencia de aquellos casos que se inicien con posterioridad a la vigencia del decreto, lo que efectivamente y estarían impedidos de querellar tal como lo preve el decreto 274/2025.

Que, por lo demás, he de coincidir con lo expresado por la representación de la UIF en orden a que la separación de su rol de parte querellante con motivo del dictado del decreto en cuestión, causaría un gravamen irreparable, comprometería el curso de investigaciones complejas ya iniciadas y en consecuencia, afectaría el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino en la materia.

En este rumbo no pasa desapercibido que los fundamentos del decreto 274/2025, rezan “[q]ue, por otra parte, en la ‘Acción prioritaria d)’ expuesta en el Informe de Evaluación Mutua y en la ‘Acción recomendada e)’ para el Resultado Inmediato 6 del Informe de Evaluación Mutua, el GAFI indicó que nuestro país debe reconsiderar la intervención de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) como parte querellante, en tanto dicha actividad podría afectar su autonomía e independencia operativa.”

“Que en el ámbito de las Unidades de Inteligencia Financiera del mundo la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) de la REPÚBLICA ARGENTINA es un caso aislado respecto a la facultad de querellar prevista en el Decreto N° 2226/08.”

“Que, en nuestro país, y de acuerdo al artículo 120 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, como





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL FEDERAL DE JUICIO N° 2 DE ROSARIO

FSM 2549/2011/TO1

órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, es el encargado de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad."

"Que, por otro lado, en el artículo 19 de la Ley N° 25.246 se establece que cuando la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) haya agotado su análisis, en el marco de su competencia, y surgieren elementos de convicción suficientes para establecer la existencia de un hecho, operación u operatoria sospechosa de lavado de activos, de financiación del terrorismo o de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, ello será comunicado al MINISTERIO PÚBLICO FISCAL a fin de establecer si corresponde ejercer la acción penal."

"Que ello se suma a la competencia de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) para poner a disposición del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y para el ejercicio de las acciones pertinentes los elementos de convicción obtenidos en el marco de su actuación, como así también para colaborar con los órganos judiciales y ese Ministerio Público en la persecución penal de los delitos de lavado de activos y sus delitos precedentes, de financiación del terrorismo o de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de acuerdo con las pautas que se establezcan reglamentariamente."

Sobre esta coyuntura, no se desprende de la letra como tampoco de los "considerando" del mencionado Decreto 274/2025 que la exclusión de la UIF para querellar opere de manera retroactiva, ya que de haberse propiciado tal alcance, debió ser expresamente consignado por el Poder Ejecutivo en la decisión administrativa respectiva. A ello cabe añadir que fue la propia UIF quien, mediante dictamen, delimitó el alcance de su intervención en el presente caso. En consecuencia, no se advierte lesión alguna a los principios de legalidad y seguridad jurídica invocados por las defensas.



Por otra parte, aun cuando la defensa de G[REDACTED] sostiene que resultaría aplicable al caso una interpretación conforme al principio pro homine, lo cierto es que tal directriz hermenéutica no se ve desconocida por la aplicación del Decreto 274/2025. Ello así, por cuanto la norma no comporta una restricción de derechos fundamentales ni implica un retroceso en el estándar de protección previsto por el orden constitucional y convencional vigente. Por el contrario, su contenido se circunscribe a regular aspectos formales vinculados a la legitimación activa de ciertos órganos del Estado, sin incidir de modo adverso en la situación de los imputados.

Por ultimo, cabe mencionar que el temperamento que aquí adopto se ve reforzado por las razones invocadas por el titular de la acción, las que he de compartir y a las que me remito en honor a la brevedad.

Es por ello y de conformidad con lo dictaminado por el MPF y la querella,

RESUELVO:

I. Rechazar la excepción por falta de acción planteada por la defensa del imputado Wilfredo S[REDACTED], y en consecuencia mantener a la Unidad de Información Financiera en su rol de parte querellante en este proceso (art. artículo 339 inciso 2) y 358 CPPN *-a contrario sensu-*).

II. Insertar, publicar y hacer saber.

N° 133/2025

